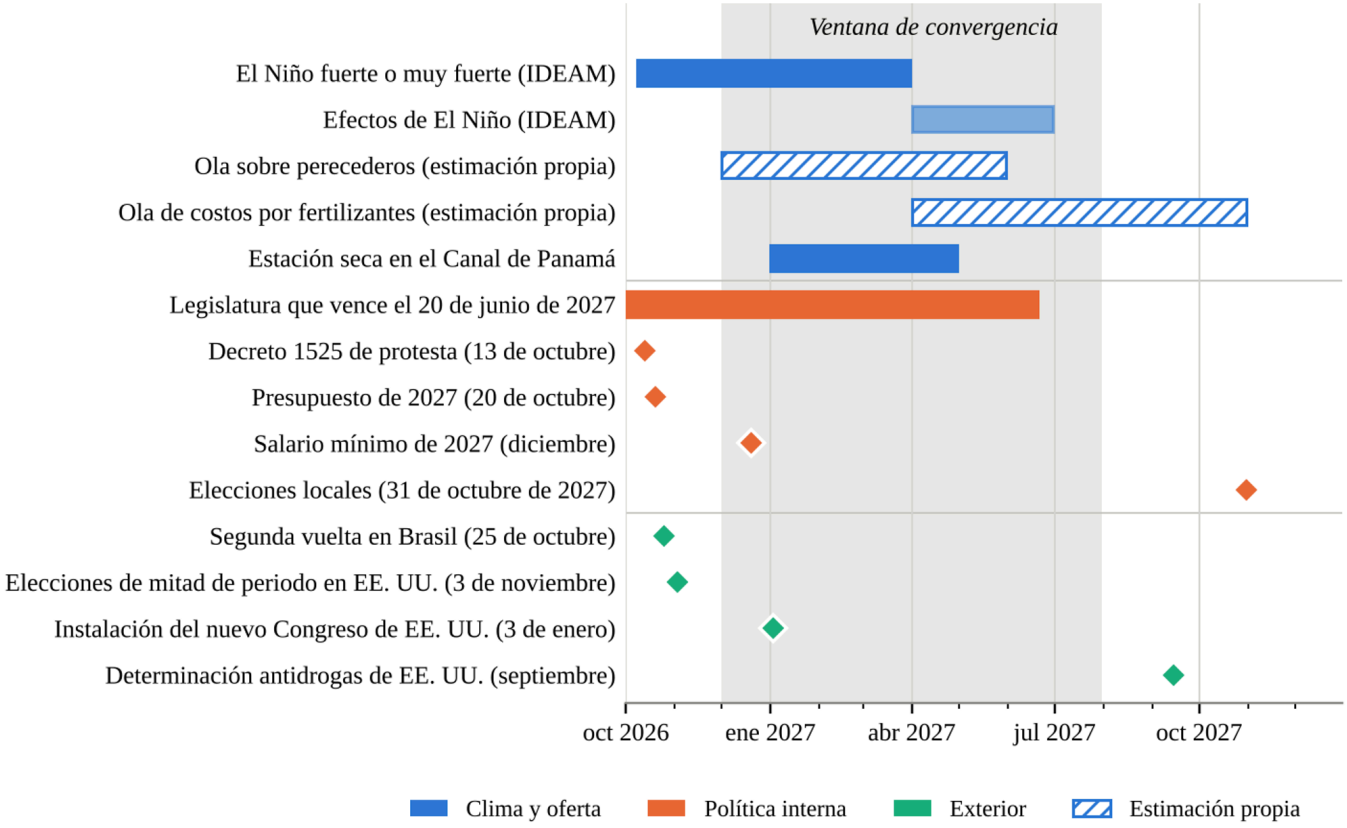
DOCUMENTOS DE TRABAJO DEL IEI · CALI, OCTUBRE DE 2026

Capitalismo de Estado discrecional e Inflación alimentaria

Historia predictiva de Colombia para 2027 en cinco tensiones, con el método de Jiang Xueqin

Por **Carlos Duarte**



Pontificia Universidad JAVERIANA Cali
Instituto de Estudios Interculturales
Especialización en Jurisdicción Agraria y Derecho de Tierras
OBSERVATORIO DE TIERRAS

Capitalismo de Estado discrecional e Inflación alimentaria

Historia predictiva de Colombia para 2027 en cinco tensiones, con el método de Jiang Xueqin

Por **Carlos Duarte***

RESUMEN

Todo empieza en la factura del supermercado. Detrás de ella, a fin de 2026, se juntan cinco fuerzas que parecían no tener relación: un fuerte episodio de El Niño y la guerra en Irán, que encarecen los alimentos; la inestabilidad alimentaria amenaza con erosionar la gobernanza; un estatuto antiterrorista que busca su mayoría mientras el país decide cómo recibirlo; un gobierno que entra, sin caja, en lo que Peter Orszag llama «capitalismo de Estado discrecional» y que ya empezó a recortar los tiempos de la consulta previa; mientras que al norte, unas elecciones de mitad de periodo medirán hasta que punto a las derechas de la región les conviene moverse al centro. Este documento lee estas tensiones antes de que terminen de ocurrir, con el método de *historia predictiva* de Jiang Xueqin. Lo que creo es que convergerán a lo largo del primer semestre de 2027, y que el choque de oferta nos encontrará con unas arcas estatales debilitadas y bajo un gobierno que ya escogió el orden frente a la protesta y la excepción negociada como política económica. Ecuador y Argentina ensayaron ese guion en 2025 y la protesta se agotó sin doblar a estos gobiernos. Pienso que el gobierno colombiano sostendrá la línea, que pagará el costo en los tribunales y en las elecciones locales, y que lo que pase en Estados Unidos difícilmente lo moverá al centro.

PALABRAS CLAVE historia predictiva; choques de oferta; El Niño; inflación de alimentos; protesta social; estatuto antiterrorista; consulta previa; capitalismo de Estado discrecional; Colombia.

* Director del Instituto de Estudios Interculturales (IEI), Pontificia Universidad Javeriana Cali. El texto adopta el método y el formato de lección de Jiang Xueqin aplicados a Colombia; ninguna de sus conclusiones se le atribuye a Jiang.

1.

EL TABLERO

¿Qué le pasa a un país que compra afuera la mayor parte de su maíz y de sus fertilizantes, que genera cerca de dos tercios de su electricidad con agua y que ya gastó su margen fiscal, cuando le llegan al mismo tiempo una sequía extrema y una guerra en el estrecho por donde pasa casi la mitad del comercio mundial de fertilizantes?

La anterior es la pregunta de este documento, y la respondo como lo haría Jiang Xueqin en sus lecciones de *Predictive History*: mirando el juego antes que a los jugadores. Jiang sostiene que la conducta de un actor se entiende por la estructura en que actúa, por sus reglas y por sus incentivos, y que predecir es la manera de poner a prueba la propia visión del mundo[1]. De su práctica salen cinco preguntas que ordenan cada tensión: i) quién tiene veto; ii) dónde pone cada jugador sus recursos; iii) por dónde pasa lo que importa; iv) qué ocurrió las veces anteriores en que el tablero tuvo esta forma; y v) qué apuesta uno como analista.

Al método le agrego dos disciplinas que Jiang no se impone. Cada apuesta lleva probabilidad, fecha de verificación e indicador, como pide Philip Tetlock[2], y cada analogía histórica se confronta con un caso que la contradiga. Dejo por fuera, además, la tendencia de Jiang a explicar los hechos por élites que todo lo controlan, y que sus críticos le reprochan con razón[3].

Dicho lo anterior, tres hechos de estructura definen el tablero colombiano entre octubre de 2026 y diciembre de 2027.

En primer lugar, la economía mundial entró en lo que Peter Orszag llama una nueva era de la oferta. La volatilidad, dijo en su conversación con Kathleen Kingsbury publicada por *The New York Times*, viene hoy de acontecimientos «a menudo con motivaciones geopolíticas»; «hemos sufrido seis de estas crisis en seis años», y el error de los inversionistas es creer «que se trata de eventos puntuales»[4].

En segundo lugar, el Estado colombiano llega a esa era sin una caja robusta. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal proyecta un déficit de 7,8 % del PIB para 2026 y de 9,5 % para 2027 sin medidas nuevas, y calcula que en 2030 los intereses equivaldrían a 51,1 % del recaudo tributario[5]. S&P bajó la calificación a BB– en abril, Fitch la tiene en BB y Moody's sostiene el último escalón del grado de inversión[6].

En tercer lugar, el gobierno que debe administrar los choques ganó con 49,66 % frente a 48,70 %, por 251.854 votos[7], y en dos meses escogió sus instrumentos: el orden como respuesta a la protesta y la excepción negociada como política económica. Las tensiones que siguen muestran esos instrumentos en uso.

La Tabla 1 resume a los jugadores con la lente de Jiang. Cada fila dice qué puede bloquear el jugador, en qué gasta y qué espero que haga en 2027.

Jugador	Su veto	Dónde pone sus recursos	Conducta esperada en 2027
Gobierno nacional	Decretos, presupuesto, Fuerza Pública, extradición	Seguridad y reconstrucción; recorta agro y Prosperidad Social	Responde al paro con orden y a la escasez fiscal con excepciones negociadas
Banco de la República	Tasa de interés; financiación del Estado	Recuperar el anclaje de las expectativas	No baja la tasa mientras El Niño empuje los alimentos
Congreso	Leyes estatutarias y presupuesto	Votos de seguridad antes de las elecciones locales	Aprueba seguridad con condiciones y cobra cada voto de bisagra
Corte Constitucional y jueces de tutela	Control previo de leyes estatutarias; suspensión de medidas	Su capital reputacional	Recortan sin romper: condicionan, difieren, suspenden
Grandes grupos económicos y gremios	Inversión, crédito, filantropía	Reconstrucción tras el sismo, Altillanura, recursos minero-energéticos	Cambian aportes visibles por reglas a la medida
Organizaciones sociales, indígenas, campesinas y de transportadores	La carretera; en los territorios étnicos, el tiempo de la consulta previa	El precio de lo que venden, de lo que compran y sus derechos previamente adquiridos	Paros de costos o por derechos en el primer semestre de 2027; tutelas en defensa de la consulta previa
Grupos armados	Control territorial y paro armado	Extorsión, oro, corredores; coca a la baja	Responden a extradiciones y bombardeos cortando la circulación
Washington	Certificación, aranceles, cooperación militar	Erradicación y alineamiento	Premia la aspersión y la alineación, con o sin Congreso demócrata
Calificadoras y mercado de deuda	Prima de riesgo y grado de inversión	Disciplina fiscal	Moody's decide si se pierde el último grado de inversión

TABLA 1. *Jugadores del tablero colombiano, 2026-2027. Fuente: elaboración propia con base en las fuentes citadas en el texto.*

Lo que creo es que el periodo tiene una ventana decisiva, el primer semestre de 2027, y que la Figura 1 la hace visible. Entre diciembre de 2026 y julio de 2027 los dos choques de oferta llegan a los precios, vence la legislatura que tendría que aprobar el estatuto antiterrorista, se aplica por

primera vez el protocolo de protesta del Decreto 1525, se instala un Congreso estadounidense distinto y arranca la precampaña de las elecciones locales del 31 de octubre de 2027. Mi anticipación analítica central es que en esa ventana el gobierno sostendrá su línea de orden frente a los paros de costos, como lo hizo Daniel Noboa en Ecuador en 2025, y que pagará el costo en los tribunales y en las elecciones locales.

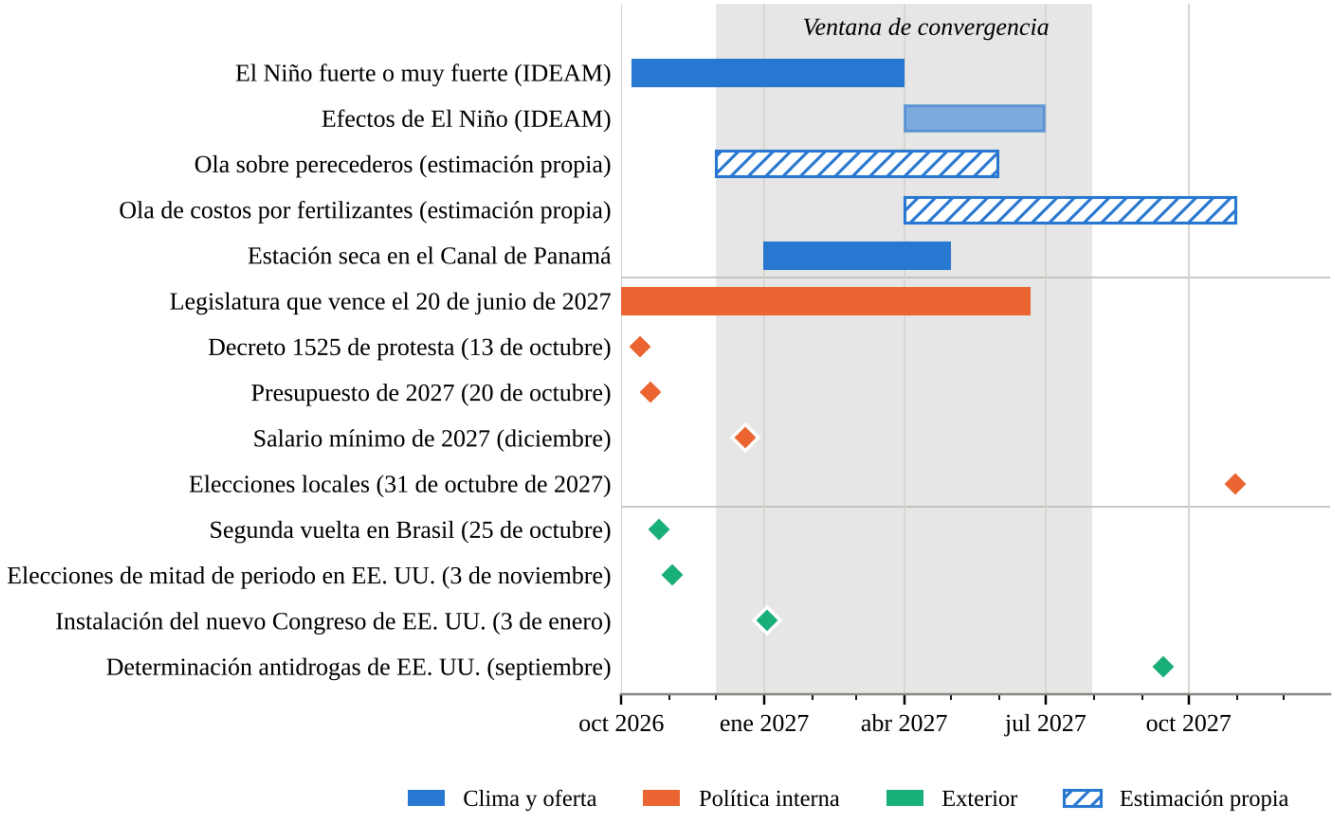


FIGURA 1. *Calendario de convergencia predictiva, octubre de 2026 a diciembre de 2027. Fuente: elaboración propia con datos del IDEAM, la Autoridad del Canal de Panamá vía EFE y los calendarios institucionales citados en el texto; las barras rayadas son estimaciones propias.*

2.

PRIMERA TENSIÓN: EL ESTRECHO, EL CANAL Y LA SEQUÍA

Jiang empieza siempre por el mapa, y el mapa del plato colombiano, que dibuja la Figura 2, tiene sus cuellos de botella lejos del país. Según Fenalce, Colombia importó en 2025 13,2 millones de toneladas de granos; 7,3 millones fueron de maíz amarillo, todo de Estados Unidos, y la soya vino casi por completo del mismo origen[8]. Entre enero y octubre de 2025 el país compró 1,94 millones de toneladas de fertilizantes, y China desplazó a Rusia como primer origen de los nitrogenados[9]. Ese maíz es el alimento del pollo, del huevo y del cerdo, que son la proteína barata de los hogares urbanos.

El primer cuello de botella es el estrecho de Ormuz. La guerra entre Estados Unidos e Irán, iniciada el 28 de febrero, cerró el estrecho el 4 de marzo, y el alto el fuego de abril no lo reabrió del todo: el 4 de octubre lo cruzaron cuatro buques frente a una línea de base de 85 diarios, y el Brent cotizaba a US$103,92 el 8 de octubre[11]. Por Ormuz pasa cerca del 45 % del comercio mundial de fertilizantes; el índice Green Markets subió de 753,26 antes de la guerra a 986,36 en abril y seguía en 806,58 en septiembre, y la urea es el fertilizante que más importa Colombia[12].

El segundo es el Canal de Panamá. La Autoridad del Canal aplicó en septiembre su primera restricción de tránsitos de 2026 por la sequía, con 34 y luego 32 cupos diarios frente a un promedio de 36, y anunció recortes de calado que llegarían a 44 pies en la estación seca, de enero a abril, con el riesgo de que un Niño fuerte agrave la situación[13]. Para Colombia el Canal pesa por un costado poco visible: el grano que sale del Golfo de México con destino a Buenaventura tiene que cruzarlo.

El tercero está en casa. El IDEAM declaró oficialmente El Niño el 8 de octubre, con 83 % de probabilidad de intensidad fuerte o muy fuerte hasta marzo de 2027 y efectos hasta el cierre del primer semestre[14]. Con 63 % de la generación eléctrica en hidroeléctricas y el gas natural licuado cubriendo ya 23 % de la demanda a través de una sola regasificadora, la sequía empuja a las térmicas y a las tarifas, y con ellas al frío, al procesamiento y al transporte de los alimentos[15].

La canasta se movía antes de la declaratoria de El Niño. En agosto la papa había subido 63,45 % en doce meses, la arracacha y el ñame 60,43 % y la yuca 20,73 %[16], y en septiembre la división de alimentos y bebidas no alcohólicas del IPC del DANE marcó 6,74 % anual[17]. Citi calcula que un episodio intenso añadiría entre 1,5 y 3,3 puntos a la inflación colombiana en los seis meses si-

guientes, el mayor efecto de la región, con una respuesta de los alimentos entre dos y seis meses después del choque; Corficolombiana espera los golpes más fuertes en arroz, plátano, caña, yuca, papa y leche[18].

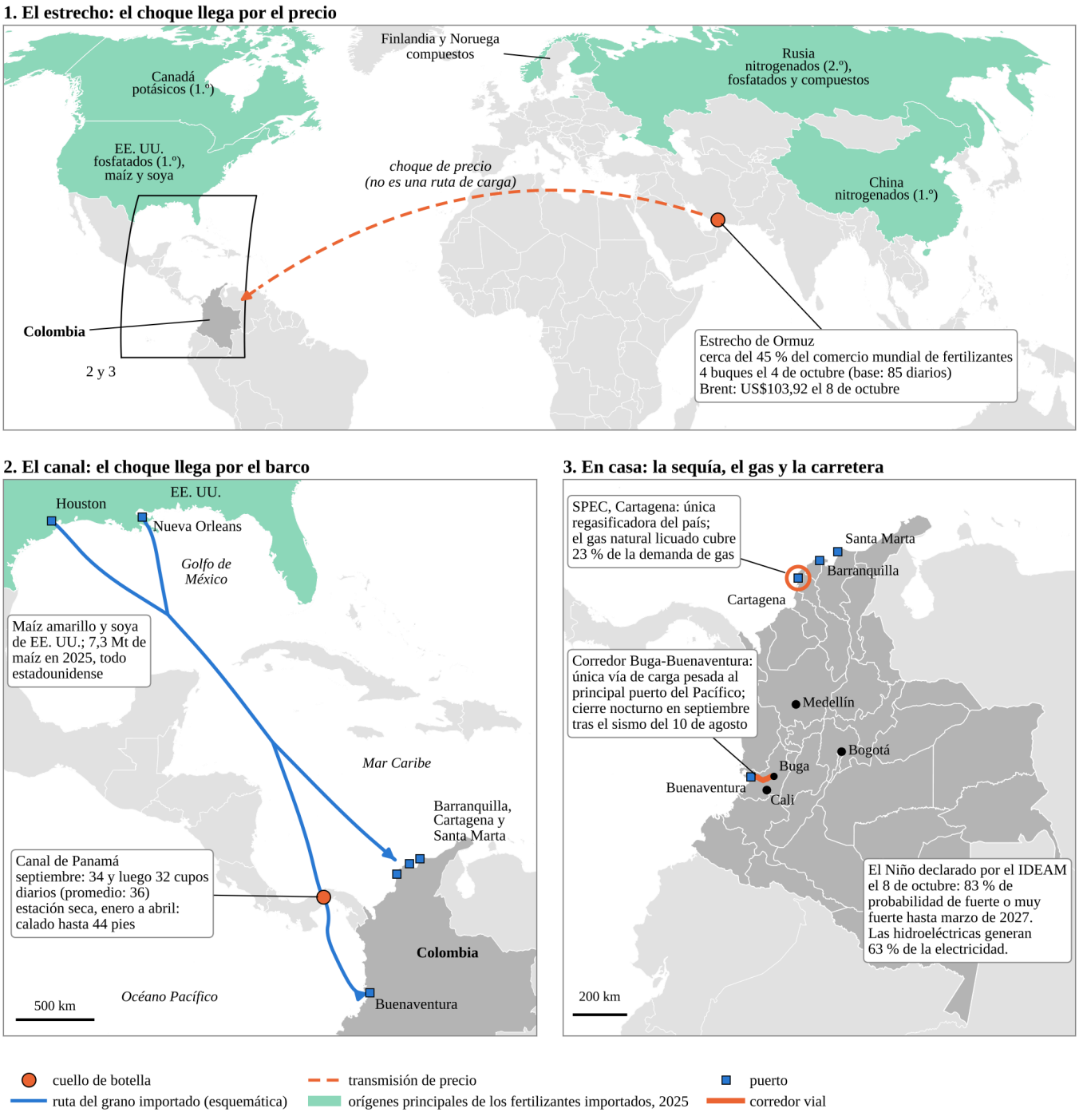


FIGURA 2. *Los tres cuellos de botella del plato colombiano. Fuente: elaboración propia con cartografía de Natural Earth y los datos citados en este apartado; las rutas del grano son esquemáticas*[10].

Orszag hizo para Estados Unidos una predicción que sirve de reloj para Colombia: precios de los alimentos «significativamente más altos el próximo verano, de forma casi predecible, debido a las restricciones en los fertilizantes y otros insumos del ciclo agrícola»[19]. Mi lectura es que aquí la factura llega en dos olas. La primera es climática y golpea a los perecederos, papa, hortalizas, frutas, leche y plátano, entre diciembre de 2026 y mayo de 2027. La segunda es de costos y llega con las siembras de 2027: el arroz, el maíz y la papa fertilizados con urea cara, y la cadena del pollo, el huevo y el cerdo, que come grano importado. Esta segunda ola dura más porque el fertilizante comprado caro en la siembra pasa al precio meses después, en la cosecha.

La historia ofrece dos casos que se contradicen, y por eso sirven. En 2015-2016 la sequía llegó con devaluación y con un paro camionero de 45 días, y en julio de 2016 los alimentos subían 15,71 % y la inflación total 8,97 %[20]. En 2023-2024, en cambio, El Niño pasó sin estampida de precios: en marzo de 2024 la inflación total bajaba a 7,36 % y los analistas hablaban de «moderación anual en los alimentos»[21].

La variable que más separa los dos casos, además del paro de 2016, es la tasa de cambio. Hoy el peso acumula una valorización de 10,7 % y abarata la urea y el maíz[22]. Pero ese colchón es frágil por dos lados: Orszag cree que el balance de riesgos «se inclina hacia la probable necesidad de tipos de interés más altos» en Estados Unidos[23], lo que encarece el dólar para economías como la colombiana, y un déficit cercano a 8 % del PIB convierte cualquier susto fiscal en presión sobre el peso.

El Estado enfrenta esta tensión con menos herramientas que en 2016. El proyecto de presupuesto de 2027 recorta 32 % al sector agropecuario[24] y 16 % a Prosperidad Social, la entidad de las transferencias a los hogares pobres[25], y el ACPM está congelado desde septiembre por el sismo[26]. Descongelarlo en plena sequía sería la decisión que más se parecería a 2016, y es la primera que el Ministerio de Hacienda tendría que pensar dos veces.

Mis previsiones para esta tensión son dos. La primera es que la inflación anual de alimentos y bebidas no alcohólicas tocará 10 % o más en al menos uno de los meses publicados entre enero y julio de 2027. La segunda es que corremos el riesgo de un racionamiento eléctrico de alcance nacional declarado antes del 30 de junio de 2027, aunque el país lo evitó por poco en 2024 y aprendió de ello.

3.

SEGUNDA TENSIÓN: DEL PRECIO A LA CALLE

La literatura comparada deja tres regularidades. Marc Bellemare encontró, para 1990-2011, que el nivel de los precios de los alimentos aumenta la conflictividad social y que su volatilidad no tiene ese efecto[27]. Cullen Hendrix y Stephan Haggard mostraron que, con alimentos caros, las democracias sufren más protesta urbana que las autocracias, porque dejan más espacio para movilizarse y porque sus políticas alimentarias suelen favorecer al campo sobre la ciudad[28]. Solomon Hsiang, Kyle Meng y Mark Cane estimaron que en los países tropicales la probabilidad de que empiece un conflicto civil se duplica en los años de El Niño frente a los de La Niña[29].

Sin embargo, el registro colombiano matiza las lecturas anteriores. En agosto de 2013 el paro agrario arrancó por el costo de los insumos, el crédito y el comercio exterior, con paperos y lecheros en Boyacá, Cundinamarca y Nariño, y el presidente Santos lo negó en público: «Ese tal paro nacional agrario no existe»[30]. Como bien lo recordamos, el tal paro creció. En 2016 la sequía y la devaluación coincidieron con el paro camionero. En 2021 los alimentos cerraron el año en 17,23 %, empujados en parte por los bloqueos de mayo[31], pero el detonante del estallido social fue una reforma tributaria. Y, en 2022, con los alimentos en 27,81 %, no hubo estallido, y el descontento entró a las urnas[32].

A partir de estos antecedentes, lo que creo es que en Colombia la inflación alimentaria abre tres cauces, y que el país usará los tres en 2027.

El primero es el *paro de costos en la periferia productora*. Paperos, arroceros, lecheros y transportadores no esperan elecciones y su repertorio es el bloqueo; su geografía probable en el primer semestre de 2027 es el altiplano cundiboyacense, Nariño, el Tolima, el Huila, los Llanos y la Panamericana del suroccidente, con un paro de transportadores si el ACPM se descongela de golpe.

El segundo es *electoral*. Las elecciones locales del 31 de octubre de 2027 ofrecen a las ciudades una vía para cobrar la factura, como en 2022, y por eso el descontento urbano por el costo de la vida tenderá a buscar las urnas antes que la calle. Un estallido nacional como el de 2021 necesita además un detonante fiscal que se perciba como injusto, y hay tres candidatos sobre la mesa: la Ley de Rescate, el salario mínimo de 2027 y un tributo para la seguridad.

El tercero es el que la literatura sobre protesta suele omitir y el que Jiang subrayaría con mayor énfasis, porque pregunta *quién tiene de verdad la capacidad de cortar la circulación*. Y, bueno, no hay que ser una gran analista para descubrir que en buena parte de la Colombia rural ese jugador está armado.

Tras la extradición de alias «Otoniel», entre el 5 y el 7 de mayo de 2022, el Clan del Golfo paralizó con un paro armado 73 municipios de diez departamentos y quemó 56 vehículos[33]; en agosto de 2024 un paro armado del ELN confinó a cerca de 50.000 personas en seis municipios del Chocó y bloqueó el acceso a alimentos y medicinas[34]. El nuevo gobierno extraditó a cinco antiguos negociadores de paz[35] y se fijó la meta de capturar o abatir a diez cabecillas en noventa días, una estrategia que, según el International Crisis Group, tiende a generar más violencia[36]. La Fundación Ideas para la Paz contaba en agosto cerca de 29.000 integrantes de grupos armados, y León Valencia, de Pares, 518 municipios con presencia armada en 2025[37]. Con una sequía encima, un paro armado fácilmente transita hacia un choque de abastecimiento.

La gobernanza es el lugar donde esos choques se vuelven profundamente políticos. Los gobiernos de 2013 y 2021 cedieron, el primero con mesas y recursos para el agro, el segundo retirando la reforma tributaria a los pocos días del paro. Este gobierno tiene menos con qué ceder y ya anunció su palanca, que es la del orden.

Frente al Consejo Regional Indígena del Cauca el presidente Abelardo de la Espriella dijo el 7 de octubre que no negociará «bajo presión», ni «bajo vías de hecho», ni «bajo amenazas», que revisará «contrato por contrato y convenio por convenio» los 1,13 billones de pesos entregados mediante planes acordados, y que «una cosa son los pueblos indígenas de Colombia y otra cosa muy distinta es el Cric»[38]. Lo anterior suena extrañamente parecido a el gesto de Santos en 2013, cuando negó al interlocutor agrario. El CRIC respondió que su cumbre del 11 al 14 de octubre en Caldono «no es un paro, no es una movilización sobre la vía, es una reunión interna»[39], y convocó para el 13 a organizaciones campesinas, afrodescendientes, estudiantiles y sindicales[40]…

En la teoría de juegos que Jiang usa en sus clases, esto se parece al juego de la gallina. Cada lado gana si el otro se aparta, los dos pierden si ninguno lo hace, y quien anuncia primero que no se apartará intenta volverse creíble para obligar al otro. El gobierno ya hizo ese anuncio. El CRIC respondió bajando el tono y ampliando sus alianzas, que es la jugada de quien prefiere no chocar ahora y acumular para después.

La analogía reciente que más nos sirve para este caso está en Ecuador, y tiene dos versiones. En octubre de 2019, tras once días de paro indígena, el gobierno de Lenín Moreno dejó sin efecto el Decreto 883, que eliminaba el subsidio a los combustibles[41]. Mientras que en septiembre de 2025 Daniel Noboa eliminó el subsidio al diésel con el Decreto Ejecutivo 126, que llevó el galón de US$1,80 a US$2,80; la CONAIE convocó un paro nacional y el gobierno respondió con un estado de excepción de sesenta días en siete provincias, cargos de terrorismo contra trece detenidos

por el ataque a un cuartel en Otavalo y el bloqueo de cuentas bancarias de la organización y de fundaciones afines[42]. El 22 de octubre la CONAIE levantó el paro sin lograr sus objetivos, con al menos tres muertos[43].

Me inclino a pensar que el primer semestre de 2027 en Colombia se parecerá más al Ecuador de 2025 que al de 2019. El gobierno colombiano tiene el respaldo del centro del país, una restricción fiscal que le impide ceder y una narrativa de seguridad ya instalada. La diferencia está en el margen. Noboa se había reelegido con más de diez puntos de ventaja; De la Espriella ganó por menos de uno, y la periferia que perdió por poco es la misma que protestaría.

La escalera probable tiene cinco peldaños: el alza de precios; el paro sectorial con bloqueo; la aplicación de los «corredores solidarios» y de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden; una muerte durante una intervención; y un paro nacional de solidaridad con detonante fiscal, que en el extremo abre la puerta a una conmoción interior como la del Catatumbo en enero de 2025. Dadas las tensiones descritas, es probable que el país llegue al segundo peldaño y posible que llegue al tercero. El cuarto depende más de la conducta de la Fuerza Pública que de la de los manifestantes, y es la decisión que el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional tendrán en sus manos.

Vale la pena remarcar que el tercer peldaño ya tiene norma. El Decreto 1525 del 13 de octubre, que examino en el apartado siguiente, cuenta el «desabastecimiento verificado de alimentos, agua potable, combustible o medicamentos» entre las causales para dar por agotado el diálogo con una manifestación. En un año de sequía, eso amarra por ley la primera tensión a la segunda: cuanto más apriete El Niño el abastecimiento, más fácil será declarar agotado el diálogo frente a un bloqueo, y la tarea de separar lo que causó el clima de lo que causó la protesta quedará en manos del puesto de mando unificado.

4.

TERCERA TENSIÓN: EL ESTATUTO, EL DECRETO Y QUIÉN PAGA EL BLOQUEO

En el debate público se confunden dos instrumentos que responden a vetos distintos. El estatuto antiterrorista es un proyecto de ley estatutaria cuyo borrador tiene 116 páginas, y más de 130 artículos según otras versiones; el gobierno lo llevaría al Consejo de Política Criminal el 15 de octubre, tras aplazar la sesión del 8, y lo radicaría después[44].

Dicho documento define el terrorismo como la conducta que produzca «miedo, pánico y zozobra, generando riesgos, amenazas o el uso de la violencia». Crea un Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas, decidido por el Consejo de Seguridad Nacional mediante acto administrativo, con congelamiento de fondos y prohibición de contratar con el Estado o de recibir subsidios. Así mismo, crea un Alto Comisionado contra el Terrorismo por cinco años, otorga facultades extraordinarias por seis meses, lleva al Consejo de Estado, en primera instancia, las tutelas contra el Presidente por operaciones de la Fuerza Pública y aumenta en un tercio la pena de la asonada cuando beneficie a una organización o persona registrada[45].

Ecuador enseña dónde está el filo de esa norma. Allá el gobierno bloqueó cuentas de la CONAIE y de fundaciones afines en medio del paro. El registro colombiano le daría al Ejecutivo esa herramienta por ley, decidida en un acto administrativo y con control judicial solo posterior. Lo que creo es que el estatuto importa menos por las penas que por el registro: es el instrumento con el que un gobierno puede secar la caja de una organización social cuya movilización considere instrumentalizada por grupos armados. La asonada agravada es la puerta de entrada.

Por ser estatutaria, la ley necesita mayoría absoluta en las dos cámaras dentro de una sola legislatura y revisión previa de la Corte Constitucional.

En julio, antes de la posesión, la coalición del presidente electo contaba en el Senado con un bloque declarado de 37 o 38 senadores, 51 con los liberales, y dependía de La U; en la Cámara tenía 60 votos confirmados frente a los 94 de la mayoría[46]. Dos días después perdió la presidencia del Senado. A favor del proyecto juegan el incentivo de votar seguridad antes de las elecciones locales, el respaldo de Washington, cuya embajada comentó el borrador junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y un patrón: en Colombia las leyes de seguridad pasan. La reforma de seguridad ciudadana de 2011 tipificó la obstrucción de vías públicas y la Corte la mantuvo en la sentencia C-742 de 2012[47]. En contra juegan la agenda congestionada por el presupuesto, la Ley de Rescate y el Plan Nacional de Desarrollo, y la exigencia de la mayoría absoluta.

Que el estatuto se apruebe en sus cuatro debates antes del 20 de junio de 2027 me parece posible, con más razones para el no que para el sí. Si se aprueba, es muy probable que la Corte recorte la definición de terrorismo o el registro; el antecedente es la sentencia C-816 de 2004, que tumbó el estatuto antiterrorista de 2003[48]. Mi apuesta es que el punto de negociación que decidirá el voto de liberales y de La U será el control judicial previo del registro, y ese es el cambio que los ponentes del proyecto podrían ofrecer para asegurar la mayoría.

El decreto de protesta ya existe, y llegó primero porque no tenía que pasar por el Congreso. El Decreto 1525 del 13 de octubre de 2026, firmado por el presidente y por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, modifica y adiciona el Decreto 003 de 2021, que se había expedido para cumplir la sentencia STC7641 de 2020 de la Corte Suprema de Justicia. Estuvo en consulta pública siete días, del 28 de septiembre al 4 de octubre[49].

El texto final es más garantista de lo que anunciaba la retórica oficial. Cita la Observación General 37 del Comité de Derechos Humanos y conserva la presunción de carácter pacífico de toda manifestación. Mantiene la prohibición de armas de fuego para los uniformados y la regla de no intervención de las Fuerzas Militares, impide que la convocatoria, los discursos previos o el rostro cubierto sirvan para activar la intervención temprana y prohíbe usar la información recogida para inteligencia o perfilamiento. Y obliga a las alcaldías a publicar, dentro de las 72 horas siguientes a una jornada con afectaciones, un balance que incluye las lesiones oculares y la violencia sexual atribuidas a agentes del Estado. Sobre los bloqueos, el nuevo artículo 30C dice que la obstrucción de vías «no altera por sí sola el carácter pacífico de la manifestación» y que solo podrá disolverse cuando la perturbación sea «grave y sostenida» y no exista otro medio menos lesivo. Por lo tanto, un primer análisis del texto, evidencia que la promesa del ministro de impedir «de forma tajante el bloqueo de carreteras nacionales»[50] no quedó en la letra.

Lo que creo es que la ingeniería legal a favor del establecimiento está en cinco mecanismos que una lectura rápida pasa de largo.

En primer lugar, el decreto agrega al Protocolo un principio de «equilibrio constitucional», que pondera la protesta con la vida, la salud, la movilidad, el trabajo, la educación, la seguridad y los servicios públicos esenciales, y advierte que «ningún derecho fundamental podrá ejercerse de manera que suprima totalmente el ejercicio concurrente de otros derechos». La ponderación se hace caso por caso, en el acta del puesto de mando, y es la puerta por la que la movilidad y el trabajo entran a la decisión de intervenir.

En segundo lugar, las causales para dar por agotado el diálogo. El artículo 31 exige antes gestiones «sostenidas y documentadas sin resultado», y su tercera causal es el «desabastecimiento verificado de alimentos, agua potable, combustible o medicamentos, acreditado mediante los medios que el PMU considere idóneos». La definición de afectación grave a terceros que el mismo decreto introduce exige que el daño sea «directamente atribuible a conductas ocurridas en el contexto de una manifestación pública»; la causal tercera no repite esa exigencia. En un año de

sequía, el desabastecimiento puede venir del clima y servir igual para cerrar el diálogo. Esa es la bisagra entre la primera tensión y esta: por la causal tercera, la sequía puede terminar activando la intervención policial.

En tercer lugar, la protesta en la puerta de las empresas. El nuevo artículo 30D crea un régimen propio para la «ocupación prolongada de accesos a instalaciones productivas», la forma que suelen tomar las protestas frente a ingenios, minas, campos petroleros y puertos. Entre los factores que el puesto de mando debe consignar para graduar la respuesta están la afectación económica, «debidamente acreditada mediante los medios que el PMU considere idóneos», y la afectación de los vínculos laborales de terceros, «acreditada mediante declaración del empleador o contratante». El artículo 8, por su parte, sienta a un delegado de los gremios en las mesas de coordinación del Protocolo.

En cuarto lugar, el decreto conecta su documentación con la responsabilidad civil. Los considerandos citan una sentencia del Consejo de Estado del 15 de julio de 2026, según la cual la protesta que excede sus límites «configura abuso del derecho susceptible de comprometer responsabilidad patrimonial», y explican que los deberes de documentación se refuerzan porque de los registros depende la efectividad de las acciones de reparación. Esa sentencia condenó solidariamente a la Corporación Comunitaria Juntas de Acción Comunal Área de Influencia Directa de San Isidro de Chichimene y a su representante legal a pagarle a Ecopetrol el lucro cesante de un bloqueo de dieciséis días a la estación Chichimene, en el Meta, en 2017, con una regla de alcance general: «la interrupción de un proceso productivo continuo genera, por sí misma, una afectación indemnizable»[51]. Leído junto con el artículo 30D, el decreto produce la prueba que una empresa necesita para demandar a la organización que convoca. Es la versión civil de las cuentas bloqueadas de la CONAIE, y no necesita estatuto antiterrorista.

Y, en quinto lugar, la decisión queda en el Ejecutivo. El puesto de mando lo preside la primera autoridad de policía, y el pronunciamiento del Ministerio Público «no constituye condición de validez de la decisión». Frente a una obstrucción de vías, la intervención puede ordenarla el presidente, o el ministro del Interior por delegación, además de alcaldes y gobernadores. El último nivel de la escala puede ejecutarlo la unidad antidisturbios «o la fuerza policial que se encuentre disponible en el territorio», lo que abre la puerta a que intervengan policías sin formación específica en el manejo de multitudes.

A pesar de lo anterior, el decreto tiene un flanco débil, y lo deja a la vista.

En sus considerandos recuerda que el derecho de reunión «solo puede limitarse por la ley y de manera expresa» y cita la sentencia C-223 de 2017 para definir lo pacífico. Esa sentencia declaró inexequibles los artículos 47 a 75 del Código de Policía por violar la reserva de ley estatutaria que el literal a del artículo 152 de la Constitución fija para el derecho de reunión y manifestación[52]. Según el recuento que hizo la prensa en septiembre, la Corte precisó en 2024 que esa reserva rige «cuando incida en su núcleo esencial» y que «impone límites tanto al Congreso como a la potestad reglamentaria del Presidente»[53]. Un principio de «equilibrio constitucional» y unas causales de dispersión fijadas por decreto quedan expuestos a una demanda de nulidad por esa vía. El gobierno alegará que son reglas para las autoridades y no límites al derecho, y la pregunta que tendrá que responder el Consejo de Estado es si tocan el núcleo del derecho o solo ordenan la actuación de quien lo garantiza.

En este ámbito, el caso regional más cercano está en Honduras. El Decreto 107-2026, publicado en La Gaceta el 26 de junio, ordena ante las tomas de vías dar prioridad a los perecederos, habilitar corredores logísticos seguros y despejar «sin dilación» carreteras, accesos, puertos, centros de acopio y rutas estratégicas, y declara que la interrupción deliberada de esas actividades «no se considerará ejercicio legítimo de derechos, sino una amenaza al interés económico general», aunque en otro inciso afirma no limitar la libre manifestación[54].

Los dos decretos el colombiano y el hondureño convierten la cadena de abastecimiento en el bien que se protege frente a la protesta. Los centros de acopio hondureños riman con los «centros de abastecimiento alimentario» que el decreto colombiano declara infraestructura crítica, y los corredores logísticos con el corredor solidario, que en Colombia incluye el transporte de alimentos perecederos.

Sin embargo, también es necesario advertir que hay diferencias remarcables. Honduras le cobra el bloqueo al funcionario: la omisión de actuar es falta grave con responsabilidad personal y no admite la excusa de la obediencia debida. Colombia conserva intacto el vocabulario de la Observación General 37 y desplaza el costo hacia la organización que convoca, por la vía civil. Y, la inafectabilidad hondureña, que en otro documento he llamado la *octava técnica del contrarreformismo agrario* porque clausura de antemano el reclamo sobre la tierra[55], no tiene equivalente en el Decreto 1525, que regula la protesta y no toca el acceso o la tenencia de las tierras rurales. Si Colombia está construyendo algo parecido, habría que buscarlo en el régimen especial para la Altillanura que examino en el apartado siguiente.

¿Cómo reaccionaría el país? En la historia reciente de Colombia, endurecer la norma no ha reducido la protesta. Por ejemplo, la tipificación de 2011 no impidió el paro agrario de 2013, y el Decreto 003 de enero de 2021 antecedió en casi cuatro meses al estallido.

La reacción de la sociedad civil colombiana tampoco sería una sola, porque el país votó partido. A comienzos de septiembre el presidente tenía 51,8 % de aprobación y la inseguridad estaba entre las dos primeras preocupaciones de los encuestados[56]. Esa mayoría, concentrada en el centro andino, le dará margen para despejar vías. La periferia que votó por la oposición, el Cauca, Nariño, el Chocó, el Pacífico y ciudades como Cali, leerá el mismo despeje como agresión.

Entre los dos podría aparecer un tercer actor, el civil que se moviliza contra la movilización. En abril de 2019, durante la minga, hubo ataques con piedras contra sedes del CRIC en Popayán[57], y el 9 de mayo de 2021 hombres armados vestidos de civil dispararon contra la minga en el sur de Cali; la Comisión Interamericana pidió investigar «incorporando un enfoque étnico-racial»[58]. Mi lectura de 2021 es que la opinión se quebró con las muertes visibles más que con los bloqueos. Con 0,96 puntos de margen electoral, este gobierno tiene poco colchón para absorber estas muertes que pueden pasar rápidamente a considerarse emblemáticas, y, además la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, cuyo acuerdo con Colombia rige hasta 2032, estará observando[59].

5.

CUARTA TENSIÓN: EL ESTADO QUE VENDE EXCEPCIONES

Kingsbury resumió el ejemplo estadounidense del artículo de Orszag como una abigarrada mezcla de «acciones doradas», participaciones del gobierno en empresas como Intel, «acuerdos específicos con empresas que reemplazan la regulación predecible».

Orszag distinguió dos formas de esa relación. Una dice: «*Estas son las reglas del juego. Vamos y las definimos*». La otra: «*Estamos probando cosas nuevas. Si vos querés, ven a verme. Seguro, llegaremos a acuerdos especiales*». De la segunda sostiene que con el tiempo es menos eficiente que un sistema de reglas, «porque crea mucha variación injustificada entre las empresas que no tiene que ver con su desempeño subyacente», y que además conduce «casi inevitablemente» a la apariencia o la realidad de la corrupción, con un efecto que «no es inmediato»[60].

Colombia parece estar entrando en la segunda forma. Los hechos de estos meses tienen cuatro expresiones.

En primer lugar, la filantropía anunciada desde la Presidencia. Tras el sismo, empresas de todo el país comprometieron miles de millones de pesos; el presidente divulgó los aportes en su cuenta[61] y los agradeció como gestos de patriotismo[62]. Así que frente a la desconfianza en los entes estatales nacionales y subregionales, en la ejecución de los recursos de reconstrucción, parte importante de dicho proceso se implementara bajo el liderazgo privado; en los que una empresa, un gremio o un cooperante asume la reposición de un territorio concreto.

En segundo lugar, el régimen a la medida. Sarmiento Angulo pidió en abril a los candidatos presidenciales compromisos para desarrollar la Altillanura[63], y el gobierno anunció un régimen especial para esa región con una meta de 400.000 hectáreas cultivadas, mientras el Ministerio de Agricultura dejaba de llamar campesinos a los campesinos para llamarlos «pequeños empresarios del campo»[64]. El mismo gobierno, en el parágrafo 5 del artículo 28 del Decreto 003 de 2021, modificado por el artículo 13 del Decreto 1525, nombra a las «comunidades campesinas organizadas» junto a los pueblos étnicos y ordena privilegiar sus «mecanismos propios de interlocución y de control interno».

En tercer lugar, la alineación geopolítica. Los Acuerdos de Barranquilla, firmados con Marco Rubio el 8 de septiembre, incluyen memorandos sobre cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras y sobre cooperación nuclear civil, y ofrecen a Estados Unidos proyectos, territorio y reglas claras a cambio de inversión en la reconstrucción[65]; en seguridad trajeron un «Plan Patriota Siglo XXI» y el anuncio presidencial de que el país volverá a fumigar[66].

Y, en cuarto lugar, la otra cara del favor, que es la sanción selectiva: la revisión, peso por peso, de lo pactado con el CRIC y un registro de terroristas decidido por acto administrativo, con congelamiento de activos y veto a la contratación pública. Orszag habla de empresas favorecidas. Aquí la discrecionalidad decide también qué organizaciones sociales quedan por fuera.

Lo que creo es que Colombia entra a la tesis de Orszag por la puerta de un Estado con arcas debilitadas. El Estado de Orszag compra acciones de Intel. El colombiano no tiene con qué, y lo que ofrece a cambio son excepciones: territorio para reconstruir, regímenes para invertir, minerales para alinearse. La variación injustificada entre empresas que preocupa a Orszag se convierte aquí en variación entre territorios.

Hay que agregar algo incómodo para cualquier lectura partidista. La discrecionalidad no empezó el 7 de agosto. El dinero que hoy se revisa contrato por contrato salió de acuerdos negociados con un actor movilizado, y el gobierno anterior intentó una consulta popular por decreto y enfrentó dos crisis con estados de excepción, en La Guajira y en el Catatumbo. Lo que cambió fue la dirección del flujo. Con Petro, los acuerdos especiales movían recursos hacia actores moviliza-

dos, aun cuando la contraparte fuera Fedegán vendiendo tierra para el campesinado. Con De la Espriella, el acuerdo especial podría ofrecer el territorio y la regla al servicio de quien puede financiar, invertir o calificar la deuda.

La lente de Jiang lo explica con su pregunta de siempre: ¿quién tiene veto? El Estado negocia con quien puede bloquearlo. Cuando la caja está llena, el veto de la carretera pesa, porque el gobierno puede pagar para levantarla. Cuando la caja está vacía, pesa más el veto de quien presta, invierte y califica, porque de él depende que el Estado siga funcionando.

El Decreto 1525 llevó esa lógica al protocolo de la protesta. Les dio a los gremios un delegado en las mesas de coordinación, creó un régimen propio para las protestas frente a las instalaciones productivas, donde el daño al empleo se prueba con la declaración del empleador, y amarró sus deberes de documentación a demandas de reparación como la que ganó Ecopetrol en Chichimene. El veto de quien invierte quedó escrito también en las reglas con que el Estado responde a la carretera.

El modelo tiene dos fallas previsibles. La primera pasa por los territorios étnicos. Los padrinazgos en el Pacífico colombiano opera sobre comunidades con títulos colectivos, donde las decisiones que las afectan exigen consulta previa, y la regla general regresa por la vía judicial: en dos meses los jueces de tutela ya suspendieron los bombardeos donde haya información de presencia de menores y el piloto de aspersión con glufosinato[67].

Pero la consulta previa está, a su vez, en la lista de reformas del gobierno.

A comienzos de septiembre el vocero presidencial, Miller Soto, anunció que la consulta «no se acaba, se transforma» y que dejaría de ser «un requisito que impida iniciar, evaluar o decidir sobre un proyecto en específico»[68]. El 1 de septiembre, bancadas del Centro Democrático y de Cambio Radical ya habían radicado el Proyecto de Ley 218 de 2026 Senado, «por medio de la cual se establece el proceso administrativo de la consulta previa»[69]. Poco tiempo después, el 6 de octubre el ministro del Interior, Rodrigo Lara, presentó un plan de noventa días contra el represamiento de expedientes, con una directiva presidencial y un proyecto de ley, y propuso eliminar el test de proporcionalidad, la ponderación que se aplica cuando el Estado y la comunidad no llegan a un acuerdo. «La Autoridad decide con lo que obra en el expediente», dijo, y advirtió que «a los que extorsionen los vamos a judicializar»[70].

El 10 de octubre el Ministerio de Ambiente presentó un borrador de decreto, abierto a comentarios hasta el 14, que modifica el Decreto 1076 de 2015: la autoridad ambiental podrá evaluar la licencia mientras la consulta sigue pendiente, aunque no podrá decidir hasta que la Dirección de

la Autoridad Nacional de Consulta Previa la declare concluida, y quien pide la licencia ya no tendrá que presentar la certificación sobre presencia de comunidades étnicas[71]. Lara lo resumió así: «a partir de este decreto todos los grandes proyectos de inversión del país pueden arrancar inmediatamente»[72]. Y el Ministerio del Interior quiere que cada consulta dure seis meses[73].

El 14 de octubre el presidente firmó la Directiva Presidencial 06, que sustituye integralmente las Directivas 01 de 2010, 10 de 2013 y 08 de 2020, los tres instrumentos del Ejecutivo que hasta entonces sostenían el test de proporcionalidad. El capítulo 11 lo dice sin matices: la reunión interinstitucional posterior al cierre «no constituye un test de proporcionalidad ni tiene por objeto adoptar una decisión colectiva sobre la viabilidad del proyecto». El capítulo 10 añade que «la ausencia de acuerdo o consentimiento no impedirá, por sí sola, el cierre administrativo» cuando haya habido oportunidades reales de participación, y el capítulo 16 ordena «eliminar de los instrumentos internos las referencias a actuaciones administrativas autónomas posteriores al cierre de la consulta previa que no se encuentren previstas en el ordenamiento vigente»[74]. El Ejecutivo se desinviste así del test que la T-129 de 2011 y la SU-123 de 2018 le habían pedido aplicar cuando no hubiera acuerdo.

De otro lado, el Proyecto de Ley 218 no elimina el test; lo degrada hasta volverlo irreconocible. Su artículo 13 lo convierte en una lista de cinco casillas que la DANCP marca de oficio en treinta días hábiles, y, si las cinco se verifican de manera acumulativa, autoriza por resolución motivada la continuación del proyecto. Las casillas son: que no se haya alcanzado concertación pese a los intentos; que el proceso haya sido de buena fe y con participación efectiva; que el proyecto persiga un fin constitucional legítimo y necesario; que no exista alternativa menos lesiva, lo cual la empresa deberá demostrar evaluando alternativas de localización, tecnología y diseño; y que las compensaciones sean proporcionales a la afectación[75]. El criterio sustantivo clásico, el de la medida menos lesiva que la T-129 de 2011 depositaba en el juez constitucional, queda convertido en una carga probatoria de la empresa interesada ante una autoridad administrativa que depende del Ministerio del Interior.

Así las cosas, al leer los dos textos juntos. La reforma no solo acorta el tiempo del derecho, también cambia el jugador que decide.

Antes, cuando no había acuerdo, el Estado tenía que justificar su medida ante un juez constitucional, con una ponderación abierta de proporcionalidad, menor lesividad y fin constitucional imperioso en la línea de la T-129 de 2011 y la SU-123 de 2018. Ahora el Estado se exime de esa ponderación por directiva y, si el Congreso aprueba el PL 218, la autoridad administrativa autoriza la continuación con una lista de cinco casillas que la empresa debe llenar. La SU-123 recordó que

«ni los pueblos indígenas tienen un derecho de veto que les permita bloquear decisiones estatales», pero añadió, en la misma frase, que el Estado tampoco puede «imponerles caprichosamente cualquier decisión»[76]. La reforma deja en pie la primera parte y debilita la segunda. Con la lente de Jiang, el veto étnico se parte en dos: ya no es un veto que condicione la decisión; es un trámite que la decisión debe atravesar.

El decreto y el proyecto de ley tienen flancos distintos. El Ministerio de Ambiente sostiene que el decreto no necesita consultarse con los pueblos étnicos porque solo coordina dos trámites y no afecta derechos existentes[77], y espero que ese sea el primer argumento que se discuta ante el Consejo de Estado.

Por otro lado, el proyecto de ley tiene el camino más estrecho. Regular el núcleo de un derecho fundamental exige ley estatutaria, y una ley que afecta directamente a los pueblos étnicos debe consultarse con ellos: por omitir esa consulta la Corte declaró inexequibles la Ley General Forestal y el Estatuto de Desarrollo Rural[78]. El propio Pacto Histórico, por boca del senador Martín Alonso Caicedo Caraballí, pidió el 9 de septiembre que el PL 218 se tramitara como ley estatutaria, por reserva del artículo 152 literal a de la Constitución; el gobierno insiste en tramitarlo como ley ordinaria[79]. El último intento de regular la consulta por ley, el proyecto de ley estatutaria 442 de 2020, se retiró en abril de 2021, después del rechazo de la ONIC y de los congresistas indígenas[80].

Así las cosas, quienes reclamarán en el Pacífico y en los territorios étnicos el sistema de reglas que Orszag echa de menos son los consejos comunitarios y los cabildos, con los títulos colectivos y con una consulta previa que tendrán que defender al mismo tiempo que la usan. Su terreno será el juez antes que la mesa, y es a ellos a quienes las alcaldías y las gobernaciones tendrán que sentar antes de firmar cualquier esquema de reconstrucción.

La segunda falla pasa por el mercado de deuda. La excepción negociada no reemplaza el recaudo, y Moody's, que sostiene el último grado de inversión, mira el déficit y no los padrinazgos. Que Moody's lleve a Colombia a grado especulativo antes del 31 de diciembre de 2027 me parece posible.

6.

QUINTA TENSIÓN: WASHINGTON, BRASILIA Y EL CENTRO

Estados Unidos vota el 3 de noviembre. El promedio de Nate Silver daba a los demócratas 8,9 puntos de ventaja en la intención de voto genérica para el Congreso al 11 de octubre, y el modelo que publica su boletín les asigna cerca de 93 % de probabilidad de recuperar la Cámara[81]. Nueve días antes vota Brasil. Flávio Bolsonaro obtuvo 47,03 % en la primera vuelta frente a 45,16 % de Lula[82], y la encuesta de Datafolha del 8 de octubre le daba 52 % de los votos válidos para la segunda vuelta del 25[83]. Gobiernos de derecha o de centroderecha dirigen ya Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay, El Salvador, Honduras y Colombia[84].

¿Empuja una derrota de Trump a esas derechas hacia el centro? Mi respuesta es que el incentivo es débil y que, donde existe, actúa sobre expedientes concretos y deja intacta la orientación de fondo. Lo explica el reparto del poder en Washington. Una Cámara demócrata controla las apropiaciones, las audiencias de control y la ratificación de tratados comerciales. No controla el arancel adicional de 12,5 % que rige para Colombia desde el 24 de julio por la sección 301[85], ni la certificación antidrogas, ni las operaciones militares, que son del Ejecutivo.

El precedente está en la historia colombiana. La Cámara demócrata elegida en 2006 congeló el tratado de libre comercio con Colombia el 10 de abril de 2008, por 224 votos contra 195[86], y en el presupuesto de 2008 recortó cerca de 104 millones de dólares de la ayuda militar, de interdicción y de erradicación, mientras aumentaba en unos 84 millones la de desarrollo alternativo, derechos humanos e instituciones[87]. Uribe no se movió al centro. Negoció expediente por expediente, empezando por la protección de sindicalistas que pedían los demócratas, y siguió buscando una segunda reelección hasta que la Corte la frenó en 2010. El tratado se ratificó en 2011, con otro presidente.

Hay tres razones más para esperar poca moderación. Un presidente que pierde el Congreso concentra su energía donde decide solo, y en la política hacia América Latina Trump decide solo; para un gobierno alineado, eso vuelve la alineación más rentable. La determinación antidrogas del 16 de septiembre mantuvo a Colombia entre los países que «fallaron de manera demostrable», con exención por interés nacional, elogió al nuevo presidente y condicionó el levantamiento de la sanción a avances en la erradicación agresiva de coca y en el desmantelamiento de redes de narcotráfico[88]. Ese incentivo empuja hacia la aspersión y la erradicación forzosa, que chocan con la sentencia T-413 de 2021 y con los cocaleros, y que alimentan la segunda ten-

sión. Si Flávio Bolsonaro gana el 25, la presión de pares en la región también irá hacia la derecha. Finalmente, la competencia entre dos derechas por las elecciones locales de 2027, el Centro Democrático y el partido del presidente, empuja hacia el flanco derecho.

Los incentivos al centro existen y vienen de adentro: la Corte, la mayoría absoluta que el estatuto todavía no tiene, las calificadoras y una periferia que decidió 2026 por menos de un punto. Hacia afuera, la cobertura empezará cuando la pregunta sea quién gobierna Washington en 2029. José Antonio Kast la formuló en su propio registro, «no es incompatible tener las mejores relaciones con China y con Estados Unidos»[89], y esa forma pragmática de cubrirse es la que veremos crecer en la región durante 2028.

7.

LAS APUESTAS

La Tabla 2 reúne las apuestas de las cinco tensiones, con su probabilidad, su anclaje, la fecha en que se verifican y el indicador. Su suma es la posición de este documento.

Una palabra sobre cómo se construyeron estas probabilidades. Salen de un juicio estructurado en la disciplina de Tetlock, y no de un modelo estadístico ni de una base de frecuencias: cada apuesta lleva una banda de probabilidad, una fecha y un indicador para poder calificarse después. En el texto las nombro con palabras y en la Tabla 2 les doy su banda: muy probable, entre 80 y 90 %; probable, entre 60 y 70 %; más probable que no, entre 50 y 60 %; posible, entre 40 y 50 %; poco probable, entre 25 y 35 %; y muy poco probable, entre 10 y 20 %. Uso bandas y no cifras exactas porque la diferencia entre un 55 % y un 60 % no es distinguible en el juicio, y fingir esa resolución sería falsa precisión. La columna de anclaje dice sobre qué descansa cada número: un pronóstico externo cuando existe una encuesta o un modelo, un caso de referencia cuando hay un precedente o una sentencia que fija la tasa base, y un juicio cuando viene sobre todo del razonamiento de los vetos y los incentivos. Dos advertencias. Las apuestas no son independientes, porque si el Gobierno sostiene su línea de orden varias se mueven juntas. Y son un punto de partida, un prior en el sentido bayesiano, que el tiempo puntuará y corregirá.

#	Apuesta	Probabilidad	Anclaje	Fecha	Indicador
1	La inflación anual de alimentos y bebidas no alcohólicas llega a 10 % o más en al menos un mes entre enero y julio de 2027	**Más probable que no** 50-60 %	Juicio rango de Citi	ago 2027	DANE, IPC por divisiones

#	Apuesta	Probabilidad	Anclaje	Fecha	Indicador
2	Racionamiento eléctrico programado de alcance nacional declarado antes del 30 de junio de 2027	**Poco probable** 25-35 %	Juicio precedente de 2024	jun 2027	MinMinas, CREG, XM
3	Paro agrario o de transportadores con bloqueo de una vía nacional por 72 horas o más entre enero y julio de 2027	**Probable** 60-70 %	Juicio 2013, 2016	jul 2027	Invías, Supertransporte
4	Paro armado que paralice el transporte en al menos un departamento por 48 horas o más entre octubre de 2026 y diciembre de 2027	**Muy probable** 80-90 %	Caso de referencia 2022, 2024	ene 2028	Defensoría, Indepaz
5	Paro nacional de la escala de 2021, con tres semanas o más y bloqueos en diez departamentos o más, antes del 31 de diciembre de 2027	**Muy poco probable** 10-20 %	Caso de referencia 2021	ene 2028	Defensoría, MinInterior
6	Al menos una persona muerta durante una intervención de la Fuerza Pública en una protesta en Colombia en 2027	**Más probable que no** 50-60 %	Juicio 2019, 2021	ene 2028	Defensoría, Temblores
7	El Decreto 1525 de 2026 es demandado ante el Consejo de Estado antes del 31 de enero de 2027	**Muy probable** 80-90 %	Caso de referencia demandas	feb 2027	Consejo de Estado
8	El Consejo de Estado suspende provisionalmente al menos una disposición del Decreto 1525 antes del 31 de diciembre de 2027	**Poco probable** 25-35 %	Juicio C-223 de 2017	dic 2027	Consejo de Estado
9	El estatuto antiterrorista se aprueba en sus cuatro debates antes del 20 de junio de 2027	**Posible** 40-45 %	Juicio conteo de votos	jun 2027	Gaceta del Congreso
10	Si se aprueba, la Corte declara inexequible o condiciona la definición de terrorismo o el registro	**Muy probable** 85-90 %	Caso de referencia C-816 de 2004	dic 2028	Corte Constitucional
11	Decreto expedido o proyecto radicado que crea un régimen especial para la Altillanura antes del 31 de diciembre de 2027	**Probable** 60-70 %	Juicio anuncios del Gobierno	dic 2027	Diario Oficial
12	Moody's lleva a Colombia a grado especulativo antes del 31 de diciembre de 2027	**Posible** 40-50 %	Juicio trayectoria fiscal	dic 2027	Moody's
13	Los demócratas ganan la Cámara de Representantes de Estados Unidos el 3 de noviembre de 2026	**Muy probable** 85-90 %	Pronóstico externo Silver	nov 2026	Resultados oficiales
14	Flávio Bolsonaro gana la segunda vuelta en Brasil el 25 de octubre de 2026	**Probable** 60-70 %	Pronóstico externo Datafolha	oct 2026	Tribunal Superior Electoral

#	Apuesta	Probabilidad	Anclaje	Fecha	Indicador
15	En la determinación de septiembre de 2027 Colombia sale de la lista de países que «fallaron de manera demostrable»	**Probable** 60-70 %	Juicio determinación de 2026	sep 2027	Casa Blanca, Depto. de Estado
16	El Consejo de Estado suspende provisionalmente al menos una disposición de la Directiva Presidencial 06 o del decreto que modifica el Decreto 1076 de 2015 antes del 31 de diciembre de 2027	**Posible** 40-50 %	Juicio C-891 de 2002, SU-123 de 2018	dic 2027	Consejo de Estado

TABLA 2. *Apuestas fechadas sobre Colombia, octubre de 2026 a diciembre de 2028. Las probabilidades van en bandas y la columna de anclaje indica sobre qué descansa cada número: un pronóstico externo, un caso de referencia o un juicio. Fuente: elaboración propia; son juicios, no hechos.*

Las apuestas 13 y 14 se resuelven antes del 4 de noviembre y sirven de prueba de calibración para el resto. En diciembre habrá dos señales que no convierto en apuestas: el salario mínimo de 2027, que llega después de un aumento de 23 %, y el precio del ACPM de enero. El IPC de enero, publicado a comienzos de febrero de 2027, será el primero con El Niño de lleno en los precios, y es el dato con el que vale la pena revisar las apuestas 1 a 6.

8. CONCLUSIONES

Las cinco tensiones describen un mismo mecanismo. La sequía y Ormuz encarecen la comida cuando el Estado tiene menos con qué amortiguarla, y el gobierno que debe responder decidió, antes de que llegara la factura, que a los bloqueos les contestará con la Fuerza Pública y a la falta de caja con acuerdos hechos a la medida de quien puede financiar o invertir. Por eso la comida cara, el estatuto, el decreto, la reforma de la consulta previa y el padrinazgo son partes de un mismo problema de gobernanza, y las elecciones en Estados Unidos lo cambian poco.

El método de Jiang obliga a decir qué haría cambiar esta lectura. Tres señales la desmentirían antes de julio de 2027: que el gobierno reabra una mesa formal con el CRIC o con las organizaciones agrarias sin que medie un paro, que el estatuto se radique con control judicial previo del registro, o que el presupuesto aprobado restituya buena parte del recorte a Prosperidad Social y al agro. Cualquiera de las tres indicaría un gobierno dispuesto a negociar con recursos antes que con la Fuerza Pública.

Si ninguna aparece, la ventana del primer semestre de 2027 exigirá cuatro cosas a actores concretos. Al Ministerio de Agricultura y a Prosperidad Social, compras públicas locales y transferencias focalizadas en los municipios donde El Niño golpee primero. Al Ministerio del Interior,

exigir que el acta del puesto de mando pruebe que el desabastecimiento es atribuible al bloqueo antes de invocar la causal tercera del Decreto 1525, y dejarlo escrito en la resolución conjunta con el Ministerio de Defensa que el decreto le ordena expedir en tres meses; así como revisar la Directiva Presidencial 06 y el Proyecto de Ley 218 de 2026 Senado para restituir el test de proporcionalidad como ponderación constitucional cuando no haya acuerdo, además de consultar con los pueblos étnicos el proyecto antes de insistir en su trámite ordinario, para no repetir la suerte de la Ley General Forestal. Al Congreso, someter el registro antiterrorista a control judicial previo antes de votarlo. Por último, pero no menos importante, a las organizaciones sociales y a las universidades de las regiones, documentar cada intervención en la protesta para que los jueces y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos tengan con qué decidir.

Notas

1 Jiang Xueqin, entrevista en *This Past Weekend*, episodio 675, https://podcasts.happyscribe.com/this-past-weekend-w-theo-von/675-professor-jiang; canal *Predictive History*, https://www.youtube.com/@PredictiveHistory.

2 Philip E. Tetlock y Dan Gardner, *Superforecasting: The Art and Science of Prediction*, Nueva York, Crown, 2015.

3 Peter Swanepoel, «What's wrong with Professor Jiang», *Daily Friend*, 1 de julio de 2026, https://dailyfriend.co.za/2026/07/01/whats-wrong-with-professor-jiang/.

4 Kathleen Kingsbury y Peter R. Orszag, «¿Por qué tu factura del supermercado empeorará?», *The New York Times*, 11 de octubre de 2026, https://www.nytimes.com/2026/10/11/opinion/economy-supply-shocks-groceries-gas.html. Cito la traducción al español. El argumento de fondo está en Peter R. Orszag y otros, «The New Supply-Side Era: The O-Ring Meets Geopolitics», septiembre de 2026, https://www.lse.ac.uk/Events/Events-Assets/PDF/2026/The-New-Supply-Side-Era-The-O-Ring-Meets-Geopolitics.pdf.

5 Infobae, 1 de octubre de 2026, https://www.infobae.com/colombia/2026/10/01/carf-proyecta-que-el-deficit-fiscal-de-colombia-sera-de-78-del-pib-en-2026-y-95-en-2027/.

6 Valora Analitik, abril de 2026, https://www.valoraanalitik.com/con-la-rebaja-de-sp-colombia-toca-su-peor-calificacion-en-su-historia-y-se-acerca-a-grado-de-alta-especulacion/; Bloomberg Línea, junio de 2025, https://www.bloomberglinea.com/latinoamerica/colombia/moodys-rebaja-la-calificacion-crediticia-de-colombia-y-advierte-sobre-deterioro-fiscal-sostenido/.

7 Escrutinio del Consejo Nacional Electoral, según RCN Radio, 25 de junio de 2026, https://newsroom.rcnradio.com/colombia/cuantos-votos-obtuvieron-abelardo-de-la-espriella-e-ivan-cepeda-tras-el-escrutinio-final-del-cne.

8 Forbes Colombia, con datos de Fenalce, 17 de marzo de 2026, https://forbes.co/2026/03/17/economia-y-finanzas/colombia-importo-132-millones-de-toneladas-de-granos-en-2025-106-mas-que-el-ano-anterior/.

9 Portafolio, 13 de febrero de 2026, https://www.portafolio.co/economia/agro/colombia-importo-1-94-millones-de-toneladas-de-fertilizantes-y-diversifico-proveedores-en-488304.

10 Natural Earth, capas de países a escalas 1:10 y 1:50 millones, divisiones administrativas de primer nivel y red vial, dominio público, https://www.naturalearthdata.com. El dato del corredor Buga-Buenaventura proviene de Analdex, «Buenaventura: terremoto, situación actual y medidas propuestas», septiembre de 2026, https://analdex.org/wp-content/uploads/2026/09/BUENAVENTURA-TERREMOTO-SITUACION-ACTUAL-Y-MEDIDAS-PROPUESTAS-1.pdf.

11 straits.live, informe del 8 de octubre de 2026 con datos de IMF PortWatch, https://straits.live/briefs/2026-10-08.

12 La República, 17 de septiembre de 2026, https://www.larepublica.co/economia/los-precios-de-fertilizantes-estan-en-maximos-por-la-guerra-en-medio-oriente-4483254.

13 Revista Summa, con información de EFE, 3 de septiembre de 2026, https://revistasumma.com/?p=246928.

14 Vanguardia, 8 de octubre de 2026, https://www.vanguardia.com/colombia/2026/10/08/el-fenomeno-de-el-nino-ya-fue-declarado-oficialmente-en-colombia-hasta-cuando-se-extendera/.

15 Valora Analitik, 10 de junio de 2026, https://www.valoraanalitik.com/?p=588025.

16 Portafolio, 8 de septiembre de 2026, https://www.portafolio.co/economia/terremoto-incendios-y-el-nino-presionaron-el-abastecimiento-y-elevaron-los-costos-de-alimentos-en-agosto-502077.

17 Valora Analitik, con datos del DANE, octubre de 2026, https://www.valoraanalitik.com/?p=616281.

18 La República, 5 de junio de 2026, https://www.larepublica.co/globoeconomia/el-nino-le-sumaria-hasta-3-26-puntos-a-la-inflacion-en-seis-meses-despues-del-evento-4408254.

19 Kingsbury y Orszag, cit.

20 DANE, comunicado de prensa del IPC de julio de 2016, https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/cp_ipc_jul16.pdf; sobre la duración del paro, Finance Colombia, 8 de agosto de 2016, https://www.financecolombia.com/?p=8221.

21 La República, abril de 2024, https://www.larepublica.co/economia/inflacion-en-colombia-en-marzo-de-2024-3835059.

22 Portafolio, 4 de octubre de 2026, https://www.portafolio.co/economia/ajuste-fiscal-sera-clave-para-los-mercados-colombianos-en-2027-y-marcara-el-rumbo-de-la-tasa-de-cambio-503764.

23 Kingsbury y Orszag, cit.

24 Valora Analitik, 8 de septiembre de 2026, https://www.valoraanalitik.com/?p=610652.

25 La Silla Vacía, 28 de agosto de 2026, https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/el-primer-presupuesto-de-abelardo-llega-a-sincerar-cuentas-sin-recortes/.

26 Ministerio de Minas y Energía, 30 de septiembre de 2026, https://minenergia.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias-index/gobierno-nacional-mantiene-estable-el-precio-del-acpm-y-ajusta-en-46-el-precio-promedio-de-la-gasolina-en-octubre/.

27 Marc F. Bellemare, «Rising Food Prices, Food Price Volatility, and Social Unrest», *American Journal of Agricultural Economics*, vol. 97, n.º 1, 2015, pp. 1-21.

28 Cullen S. Hendrix y Stephan Haggard, «Global Food Prices, Regime Type, and Urban Unrest in the Developing World», *Journal of Peace Research*, vol. 52, n.º 2, 2015, pp. 143-157.

29 Solomon M. Hsiang, Kyle C. Meng y Mark A. Cane, «Civil Conflicts Are Associated with the Global Climate», *Nature*, vol. 476, 2011, pp. 438-441.

30 Vanguardia, 26 de agosto de 2013, https://www.vanguardia.com/colombia/2013/08/26/el-tal-paro-agrario-no-existe-presidente-santos/.

31 El Heraldo, 5 de enero de 2022, con datos del DANE, https://www.elheraldo.co/economia/la-inflacion-en-colombia-en-2021-fue-de-562-877829.

32 Bloomberg Línea, 5 de enero de 2023, https://www.bloomberglinea.com/2023/01/05/inflacion-de-colombia-cerro-2022-en-1312-nuevo-record-fuera-de-expectativas/.

33 Vanguardia, 9 de mayo de 2022, con datos de Indepaz, https://www.vanguardia.com/colombia/el-paro-armado-del-clan-del-golfo-ha-afectado-a-73-municipios-denuncia-indepaz-CX5176466.

34 Diario Occidente, 13 de agosto de 2024, https://occidente.co/colombia/paro-armado-del-eln-en-choco-afecta-a-seis-municipios/.

35 Vanguardia, 6 de septiembre de 2026, https://www.vanguardia.com/colombia/2026/09/06/de-la-espriella-ordena-hacer-efectiva-la-extradicion-a-ee-uu-de-cinco-antiguos-negociadores-de-paz/.

36 MercoPress, 10 de agosto de 2026, https://en.mercopress.com/2026/08/10/de-la-espriella-sets-ten-armed-group-leaders-as-his-target-for-his-first-90-days.

37 MercoPress, cit.; León Valencia, «Tiempos violentos», *Cambio*, 9 de septiembre de 2026, https://cambiocolombia.com/puntos-de-vista/articulo/2026/9/tiempos-violentos.

38 El País (Cali), 9 de octubre de 2026, https://www.elpais.com.co/politica/cauca-epicentro-del-pulso-politico-entre-el-presidente-abelardo-de-la-espriella-y-el-cric-indigenas-se-concentran-en-caldono-0948.html.

39 El Heraldo, 7 de octubre de 2026, https://www.elheraldo.co/colombia/2026/10/07/cric-asegura-que-no-habra-bloqueo-de-vias-durante-cumbre-indigena-en-cauca-tras-advertencia-de-adle-no-es-un-paro/.

40 El País (Cali), 9 de octubre de 2026, cit.

41 El Universo, 14 de octubre de 2019, https://www.eluniverso.com/noticias/2019/10/14/nota/7559345/decreto-883-queda-efecto-se-trabaja-nuevo.

42 Wikipedia, «2025 Ecuador protests», consultada el 12 de octubre de 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Ecuador_protests; Expreso, 25 de septiembre de 2025, https://www.expreso.ec/actualidad/paro-2025-vs-2019-y-2022-similitudes-diferencias-y-consecuencias-para-ecuador-258426.html.

43 El Heraldo, 22 de octubre de 2025, https://www.elheraldo.co/mundo/2025/10/22/el-movimiento-indigena-anuncia-el-cese-del-paro-en-ecuador-tras-un-mes-de-protestas/.

44 Minuto60, 8 de octubre de 2026, https://minuto60.com/politica/estatuto-antiterrorista-mininterior-hace-precisiones-proyecto/16788.

45 El Universal, 6 de octubre de 2026, https://www.eluniversal.com.co/colombia/2026/10/06/estatuto-antiterrorista-estos-son-los-cambios-que-propone-el-gobierno-de-la-espriella/; Vanguardia, 9 de octubre de 2026, https://www.vanguardia.com/colombia/2026/10/09/gobierno-prepara-estatuto-antiterrorista-con-nuevas-facultades-y-una-lista-de-sancionados/.

46 Valora Analitik, 18 de julio de 2026, https://www.valoraanalitik.com/cuentas-de-mayorias-de-de-la-espriella-en-camara-y-senado/.

47 Global Freedom of Expression, Universidad de Columbia, reseña de la sentencia C-742 de 2012, https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/?p=48875.

48 Función Pública, sentencia C-816 de 2004, https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=15243.

49 Ministerio del Interior, Decreto 1525 del 13 de octubre de 2026, «Por el cual se modifican y adicionan disposiciones del Decreto 003 de 2021 [...]», texto firmado por el presidente de la República y el ministro del Interior. Las citas del decreto en este apartado y en el siguiente provienen de ese texto.

50 Pulzo, 9 de octubre de 2026, https://www.pulzo.com/nacion/que-establece-nuevo-decreto-protesta-social-gobierno-PP5325899.

51 Cuatrecasas, «Responsabilidad patrimonial en el ejercicio indebido de la protesta: Consejo de Estado fija límites», 7 de septiembre de 2026, https://www.cuatrecasas.com/es/latam/art/responsabilidad-patrimonial-ejercicio-indebido-protesta-consejo-estado-fija-limites; Holland & Knight, 9 de septiembre de 2026, https://www.hklaw.com/en/insights/publications/2026/09/consejo-de-estado-reconoce-responsabilidad-patrimonial-por-bloqueos. Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 50001-23-33-000-2019-00211-02.

52 Corte Constitucional, comunicado de la sentencia C-223 de 2017, https://ambitojuridico.com/sites/default/files/BancoMedios/Archivos/comunicado-sentencia-c-223-17.pdf.

53 Minuto60, 30 de septiembre de 2026, con referencia a las sentencias C-090 y C-136 de 2024, https://www.minuto60.com/politica/que-dicen-desde-congreso-sobre-regulacion-las-protestas/16326.

54 Congreso Nacional de Honduras, Decreto 107-2026, Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería, Pequeños Productores Agrícolas de Honduras, La Gaceta n.º 37.178, 26 de junio de 2026, artículos 5 a 7, https://www.tsc.gob.hn/web/leyes/Decreto-107-2026.pdf.

55 Carlos Duarte, «Campesinos, garífunas y pueblos indígenas de Honduras frente a la inafectabilidad. El Decreto 107-2026 y la octava técnica del contrarreformismo agrario latinoamericano», documento de trabajo, Cali, Instituto de Estudios Interculturales, septiembre de 2026.

56 El País (Cali), 10 de septiembre de 2026, con datos de AtlasIntel para Bloomberg, https://www.elpais.com.co/politica/gobierno-de-la-espriella-tiene-una-aprobacion-del-54-de-los-colombianos-revela-encuesta-de-atlasintel-1058.html.

57 La FM, 4 de abril de 2019, https://www.lafm.com.co/colombia/denuncian-que-ofrecieron-dinero-mototaxistas-para-atacar-sede-del-cric-en-popayan.

58 Vanguardia, 10 de mayo de 2021, https://www.vanguardia.com/colombia/cidh-expresa-profunda-preocupacion-por-ataque-a-marcha-indigena-en-cali-HA3750328; sobre los videos de civiles armados en el barrio Ciudad Jardín, Blu Radio, mayo de 2021, https://www.bluradio.com/blu360/pacifico/investigaran-a-policias-por-videos-de-civiles-disparando-a-manifestantes-en-el-barrio-ciudad-jardin.

59 El Espectador, 25 de enero de 2023, https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/oficina-de-la-onu-derechos-humanos-renueva-por-nueve-anos-su-mandato-en-colombia/.

60 Kingsbury y Orszag, cit.

61 Portafolio, 19 de agosto de 2026, https://www.portafolio.co/economia/gobierno/estas-son-las-empresas-que-aportaran-220-000-millones-para-la-reconstruccion-del-valle-del-cauca-tras-terremoto-500735.

62 Publimetro, 18 de agosto de 2026, https://www.publimetro.co/noticias/2026/08/18/gracias-por-su-patriotismo-de-la-espriella-celebra-nueva-donacion-de-empresarios-para-la-reconstruccion/.

63 Forbes Colombia, 30 de abril de 2026, https://forbes.co/2026/04/30/editors-picks/sarmiento-angulo-pide-a-candidatos-presidenciales-compromisos-para-desarrollar-la-altillanura/.

64 Pares, «30 días del campo milagro de De la Espriella», 25 de septiembre de 2026, https://www.pares.com.co/30-dias-del-campo-milagro-de-de-la-espriella/.

65 Publimetro, 8 de septiembre de 2026, https://www.publimetro.co/barranquilla/2026/09/08/los-acuerdos-de-barranquilla-que-dejo-la-visita-de-marco-rubio-asi-sera-la-nueva-alianza-con-ee-uu/.

66 Noticias RCN, 8 de septiembre de 2026, https://www.noticiasrcn.com/colombia/presidente-abelardo-de-la-espriella-revela-detalles-de-su-encuentro-con-marco-rubio-1058962.

67 Publimetro, 3 de septiembre de 2026, https://www.publimetro.co/noticias/2026/09/03/freno-en-seco-a-de-la-espriella-juzgado-ordena-suspension-de-bombardeos-en-zonas-donde-podria-haber-menores-de-edad/; Infobae, 23 de septiembre de 2026, https://www.infobae.com/colombia/2026/09/23/juez-mantiene-suspendida-la-fumigacion-aerea-de-cultivos-de-coca-con-glufosinato-en-putumayo-estas-son-las-razones/.

68 Cambio, septiembre de 2026, https://cambiocolombia.com/pais/articulo/2026/9/gobierno-de-abelardo-de-la-espriella-anuncia-cambios-en-la-consulta-previa-y-las-licencias-ambientales-se-transforma-para-ser-mas-clara.

69 Gaceta del Congreso 1245 del 10 de septiembre de 2026, Proyecto de Ley 218 de 2026 Senado, https://leyes.senado.gov.co/.

70 Portafolio, 6 de octubre de 2026, https://www.portafolio.co/economia/gobierno/gobierno-anuncia-reforma-al-procedimiento-de-consulta-previa-para-destrabar-expedientes-503950; *Cambio*, 6 de octubre de 2026, https://cambiocolombia.com/poder/articulo/2026/10/consulta-previa-el-cambio-que-propone-el-gobierno-para-decidir-cuando-comunidades-y-estado-no-llegan-a-un-acuerdo.

71 La Silla Vacía, 10 de octubre de 2026, https://www.lasillavacia.com/en-vivo/minambiente-propone-decreto-para-evaluar-licencias-sin-esperar-a-la-consulta-previa/; *El Espectador*, https://www.elespectador.com/ambiente/licencias-ambientales-y-consulta-previa-podrian-ir-al-tiempo-segun-borrador-de-minambiente/, consultado el 14 de octubre de 2026; Infobae, 10 de octubre de 2026, https://www.infobae.com/colombia/2026/10/10/licencias-ambientales-y-consultas-previas-se-tramitarian-de-forma-simultanea-esto-dice-borrador-de-decreto-del-gobierno-de-la-espriella/.

72 La Silla Vacía, 10 de octubre de 2026, cit.

73 Infobae, 10 de octubre de 2026, cit.

74 Directiva Presidencial 06 del 14 de octubre de 2026, capítulos 10, 11 y 16, Presidencia de la República.

75 Gaceta del Congreso 1245, Proyecto de Ley 218 de 2026 Senado, artículos 3.7 y 13 (parágrafo 1).

76 Corte Constitucional, sentencia SU-123 de 2018, párr. 6.3, https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/SU123-18.htm.

77 *El Espectador*, cit.

78 Corte Constitucional, sentencias C-030 de 2008, sobre la Ley 1021 de 2006, General Forestal, y C-175 de 2009, sobre la Ley 1152 de 2007, Estatuto de Desarrollo Rural.

79 Senado de la República, solicitud del senador Martín Alonso Caicedo Caraballí sobre la reserva de ley estatutaria del Proyecto de Ley 218 de 2026, 9 de septiembre de 2026, Gaceta del Congreso 1245.

80 *El Nuevo Siglo*, 19 de abril de 2021, https://www.elnuevosiglo.com.co/politica/retiran-regulacion-de-consulta-previa-para-socializarla.

81 Silver Bulletin, promedio de voto genérico, actualizado el 11 de octubre de 2026, https://www.natesilver.net/p/generic-ballot-average-2026-nate-silver-bulletin-congress-polls; pronóstico de mitad de periodo, https://www.natesilver.net/p/nate-silver-2026-midterm-election-polls-model.

82 O Povo, 5 de octubre de 2026, https://mais.opovo.com.br/jornal/politica/2026/10/05/lula-fala-em-licao-da-democracia-e-considera-resultado-inesperado.html.

83 Brasil de Fato, 8 de octubre de 2026, https://www.brasildefato.com.br/2026/10/08/datafolha-segundo-turno-flavio-bolsonaro-49-lula-45/.

84 Euronews, 23 de junio de 2026, https://es.euronews.com/2026/06/23/bolsonaro-bukele-fujimori-espriella-trump-auge-derecha-america-latina; sobre la proclamación de Keiko Fujimori, El Peruano, julio de 2026, https://elperuano.pe/noticia/299509-elecciones-2026-jne-oficializa-proclamacion-de-keiko-fujimori-como-presidenta-electa.

85 Portafolio, 23 de julio de 2026, https://www.portafolio.co/negocios/comercio/por-que-estados-unidos-impuso-un-arancel-de-12-5-a-colombia-y-cuales-sectores-seran-los-mas-golpeados-498849.

86 Bilaterals.org, 10 de abril de 2008, https://bilaterals.org/us-house-agrees-to-shelve-colombia.

87 June S. Beittel y Clare Ribando Seelke, *Colombia: Issues for Congress*, Washington, Congressional Research Service, RL32250, 7 de agosto de 2009, https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc689370/m1/1/high_res_d/RL32250_2009Aug07.pdf.

88 Vanguardia, 16 de septiembre de 2026, https://www.vanguardia.com/colombia/2026/09/16/trump-mantiene-a-colombia-en-la-lista-antidrogas-y-deja-una-puerta-abierta-a-de-la-espriella/.

89 Euronews, cit.

Capitalismo de Estado discrecional e Inflación alimentaria

Historia predictiva de Colombia para 2027 en cinco tensiones, con el método de Jiang Xueqin

Carlos Duarte

Documentos de Trabajo del IEI · Cali, octubre de 2026

Pontificia Universidad JAVERIANA Cali
[VIGILADA MINEDUCACIÓN Res. 12220 de 2016]
Instituto de Estudios Interculturales
Especialización en Jurisdicción Agraria y Derecho de Tierras
OBSERVATORIO DE TIERRAS